

REPÚBLICA DE COLOMBIA



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

RESOLUCIÓN (00000182) DE 2020

(2020-01-04)

"Por medio de la cual se adoptan unas medidas de protección de acuerdo con las deliberaciones hechas por parte del Comité Especial para casos de Servidores y Ex Servidores Públicos"

LA DIRECTORA GENERAL (E) DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto Ley 4065 de 2011, en concordancia con el Decreto 1066 de 2015, modificado por el Decreto 567 de 2016, y Que, mediante Resolución 2082 de 2019 del Ministerio del Interior se realizó el encargo de las funciones del empleo de Director General de Unidad Administrativa Especial, código 015, grado 24 de la Unidad Nacional de Protección – UNP a la doctora Luz Angélica Vizcaino Solano, actual Subdirectora de Talento Humano.

CONSIDERANDO:

Que el Estado, por conducto de la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, tiene a cargo el análisis, coordinación y articulación para la protección integral de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, grupos y comunidades que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias o en razón al ejercicio de su cargo.

Que de acuerdo con el artículo 2.4.1.2.3, numeral 13 del Decreto 1066 de 2015, modificado por el Decreto 567 de 2016, la protección se define como el *"Deber del Estado Colombiano de adoptar medidas especiales para personas, grupos o comunidades en situación de riesgo extraordinario o extremo, que seari objeto de este Programa, con el fin de salvaguardar sus derechos."* (Cursiva fuera del texto).

Que son objeto de Protección las personas en situación de riesgo extraordinario o extremo en razón del riesgo o del cargo, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 2.4.1.2.6 y 2.4.1.2.7 del Decreto 1066 de 2015, modificado por el Decreto 567 de 2016.

Que el artículo 2.4.1.2.2 del Decreto 1066 de 2015, modificado por el decreto 567 de 2016 establece como uno de los principios que orientan las acciones en materia de protección, el principio de Temporalidad, lo que implica que las medidas de protección se mantendrán mientras subsista un nivel de riesgo extraordinario o extremo o en tanto la persona permanezca en el cargo, según sea el caso.

Que las medidas de prevención y protección para la protección de la población objeto del Programa son aquellas dispuestas en los artículos 2.4.1.2.10 y 2.4.1.2.11 del Decreto 1066 de 2015, modificado por el decreto 567 de 2016 sin perjuicio de otras diferentes a las estipuladas, las cuales se podrán adoptar teniendo en cuenta un enfoque diferencial, de acuerdo al parágrafo 2 del artículo 2.4.1.11 del Decreto 1066 de 2015, modificado por el decreto 567 de 2016.

Que de acuerdo con lo estipulado en el parágrafo 4°, al artículo 2.4.1.2.40 del Decreto 1066 de 2015, modificado del decreto 567 de 2016 dispuso la creación de un Comité especial conformado por el Director de la Unidad Nacional de Protección o su delegado, el Director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional o su delegado, y el Subdirector de Evaluación de Riesgo de la Unidad Nacional de Protección o su delegado, quienes tienen la facultad de definir las medidas a implementar.

Que de esta manera las deliberaciones, definición de medidas y propuestas realizadas por el comité especial para servidores y ex servidores públicos son consignadas en el acta suscrita por los miembros del Comité y el secretario técnico y sirven de soporte a la decisión a implementar según el ámbito de sus competencias, por parte del Director General de la Unidad Nacional de Protección, o del Director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, según sea el caso.

Que, de conformidad a lo indicado en el parágrafo 2° del artículo 2.4.1.2.40 del Decreto 1066 de 2015, modificado por el Decreto 567 de 2016, el caso de la señora CLARA ISABEL VEGA RIVERA, identificada con número de cédula 55169708, fue presentado ante el Grupo de Valoración Preliminar – GVP; cuerpo colegiado que determinó el nivel de riesgo como EXTRAORDINARIO, considerando que en el desarrollo de la valoración del nivel de riesgo realizada fueron tenidas en cuenta las siguientes consideraciones: población, antecedentes personales de riesgo, análisis de contexto, permanencia en el sitio de riesgo, vulnerabilidad asociada al entorno social, entorno en donde desarrolla actividades y/o trabajo, entorno comunitario y desplazamientos, entre otras. Al respecto, se hace oportuno mencionar que, tales circunstancias fueron base y objeto del estudio del nivel de riesgo que se llevó a cabo, el cual se enfocó en todas y cada una de sus calidades, analizando de manera íntegra el resultado de la información compilada y las actividades de verificación en las diferentes etapas del procedimiento ordinario de la Unidad Nacional de Protección en atención a la normativa que rige a esta Entidad.

Que el caso de la señora CLARA ISABEL VEGA RIVERA, fue presentado ante el Comité Especial de Servidores y Ex – Servidores Público, posterior a las actividades de campo, recopilación y análisis de la información realizadas en el desarrollo de la evaluación de riesgo que le fue efectuada, en su condición de Servidora pública – Secretaria General de Servicios Postales Nacionales, reside en Bogotá, informa que en su cargo ha tomado decisiones contundentes relacionadas con temas de contratación del personal vinculado a la entidad, situación por la cual teme que se generen escenarios que afecte su seguridad personal. La valorada refiere que no se han presentado amenazas en su contra o de su familia. La situación anterior, fue dada a conocer junto al presidente de la entidad, ante el señor Fiscal General.

Argumento la evaluada que se han detectado formas y estrategias que utilizan organizaciones que delinquen al interior de la empresa postal, en medio de esta red afirma que se encuentran vinculadas empresas de transporte, vigilancia y sub –contratistas, donde en el momento se ha generado la desvinculación del Director Nacional de Seguridad

Postal, y el director de infraestructura, situación por la cual aduce que existe desde ya, un riesgo latente en su contra. La situación anterior, fue puesta en conocimiento de autoridades judiciales y entes de control.

Que, sumado a lo anterior, se observa del análisis del riesgo, que el profesional a cargo del caso tuvo en cuenta, los hechos históricos de presunto riesgo acaecidos por la valorada, las vulnerabilidades asociadas al contexto de seguridad de donde reside, los entornos de tipo social, junto con la información suministrada por las entidades y autoridades consultadas; Servicios Portales Nacionales S.A. es una sociedad pública, vinculada al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la sociedad tiene autonomía administrativa y presupuestal, la cual refiere que la evaluada se encuentra vinculada mediante contrato a término indefinido como Secretaria General a partir del 07 de junio de 2019. De igual forma ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se puso en conocimiento para que se adelante la correspondiente investigación administrativa – sancionatoria, con relación al Contrato No 070 de 2019, el cual, tenía el objeto contractual; "Prestación de servicio de vigilancia y seguridad privada", a las sedes e intereses patrimoniales de la entidad, contrato equivalente a cinco mil trescientos cuarenta y tres millones de pesos, sin embargo, en dicho contrato se evidenció un presunto favorecimiento a una empresa que firmó contrato con la entidad en junio del 2019.

En este procedimiento, la Dirección Nacional de Seguridad Postal, realizó la evaluación técnica y económica de la convocatoria pública, realizando un estudio de conveniencia y oportunidad junto al señor Andrés Mauricio Gómez, coordinador de seguridad, los cuales elaboraron, sustentaron y fundamentaron el componente técnico y económico del proceso de convocatoria pública No 005 de 2019.

Que, con fundamento en las actividades de verificación anteriormente indicadas, se determina que, se evidencian situaciones que pueden afectar la seguridad e integridad personal de la valorada, lo anterior, debido a las denuncias interpuestas ante el ente judicial, el cual investiga presuntos delitos al interior de la entidad por la pérdida de envíos internacionales, conllevando a la captura de un trabajador en la ciudad de Medellín. Así mismo, en cabeza de los directivos, se puso en conocimiento de la Fiscalía General De La Nación, Superintendencia de Vigilancia, Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca y PGN, una conducta que posiblemente es irregular y que al momento se encuentra en proceso investigativo (Contrato No 070 de 2019), donde según los informes, se encuentran dos personas involucradas en el proceso, situación por la cual, por decisión unánime, resolvieron terminar unilateralmente el contrato laboral del Director Nacional de Seguridad Postal, el cual por su perfil de abogado, tenía pleno conocimiento de la selección al comienzo del proceso. Este escenario ha desencadenado múltiples denuncias que se encuentran registrados en informes por parte de la directiva, situación por la cual el Estado colombiano deberá proteger la vida e integridad personal de la valorada, dado a que continúa aportando información ante la autoridad judicial, y dado su factor, su vulneración se presenta en los desplazamientos que realiza en la ciudad de Bogotá y fuera de ella, especialmente a las regionales de 4-72 a nivel país, zonas donde no son muy seguras para la evaluada.

En consecuencia, la situación de la evaluada presenta características presentes e importantes que la exponen a un riesgo superior a aquel que no está en el deber jurídico de soportar. Por lo tanto, se concluye que la evaluada se encuentra en un riesgo EXTRAORDINARIO, que no está en el deber jurídico de soportar, con base en la jurisprudencia vigente en consecuencia, los delegados del Comité Especial de Servidores

y Ex – Servidores Públicos, recomendaron implementar medidas de protección a la valorada.

Que así mismo, es imperioso destacar que dentro del estudio de nivel de riesgo la matriz puede arrojar (tres tipos de resultados (ordinario, extraordinario o extremo) Escala a 49% (Riesgo Ordinario), 50% a 79% (Riesgo Extraordinario) y 80% a 100% (Riesgo Extremo); en tal sentido, es pertinente resaltar que en los rangos de extraordinario y de extremo hay diferentes niveles de intensidad del riesgo, por ello, no todas las personas que enfrenten un riesgo extraordinario o extremo van a tener la misma medida de protección, ya que las medidas a implementar, ratificar, ajustar o finalizar dependen del resultado de la matriz, así como de las condiciones de modo, tiempo y lugar dentro de las cuales las personas realizan sus desplazamientos y ejercen sus actividades diarias, lo anterior es alimentado por la recolección de información, la entrevista y el análisis que se presenta ante el Comité Especial para servidores y Ex servidores públicos.

Que en virtud del resultado de la mencionada evaluación de riesgo, el Comité Especial para Servidores y Ex servidores Públicos, celebrado el día **23/12/2019** recomendó:

- a. Nombre: **CLARA ISABEL VEGA RIVERA**
- b. Cedula: **55169708**
- c. Población: **15.1. Otros Servidores Públicos**
- d. Cargo: **Otros servidores públicos - Secretaría General, Servicios Postales Nacionales S.A 4-72, residente en la ciudad de Bogotá D.C.**
- e. Datos Ubicación del Evaluado: **Carrera 6 No. 151 - 80 Apto 902 Torre 3, Pino Foreste - clara.vega@4-72.com.co - No aporta - 3164982205 - BOGOTA, D.C.**
- f. Recomendaciones: **Implementar un (1) vehículo blindado y un (1) hombre de protección con cargo al convenio.**
- g. Temporalidad: **Por doce (12) meses o hasta tanto surta el resultado del estudio de nivel de riesgo, a partir de la fecha en la cual quede en firme el presente acto administrativo.**
- h. Observaciones:
 - 1. **En caso de contar con medidas de protección diferentes a las adoptadas mediante el presente acto administrativo, proceder a su ajuste y/o finalización de acuerdo con las recomendaciones hechas por el Comité.**
 - 2. **Los miembros del Comité Especial decidieron remitir el presente caso a la Secretaría General de la UNP, con el fin de tener en cuenta dentro del convenio la asignación y/o ratificación de las medidas.**

Que teniendo en cuenta la normatividad que rige la materia, estas recomendaciones se entienden ajustadas a la ley; por lo cual, la UNP procederá a implementar las medidas definidas que son de su competencia y a remitir a las demás entidades lo que corresponda.

Que en los casos que la Unidad Nacional de Protección – UNP tenga conocimiento respecto a situaciones excepcionales que se le presenten o que incurra un beneficiario y/o beneficiaria del programa de protección como por ejemplo salida del país, desaparición presunta, secuestro o muerte presunta, captura por autoridad competente, por imposición de medida de aseguramiento o pena privativa de la libertad que se cumpla en establecimiento de reclusión o con el beneficio de detención domiciliaria, por imposición de sanción de destitución en proceso disciplinario debidamente ejecutoriado para el caso de funcionarios públicos o por pérdida de investidura debidamente ejecutoriada, entre otras,. O las análogas no descritas taxativamente en la normatividad vigente.

Que a fin de dar claridad respecto al alcance del desmonte preventivo y provisional y con el objeto de que los beneficiarios del programa de prevención y protección tengan conocimiento sobre la aplicación y ejecución de tal procedimiento se informa que, en esos casos anteriormente mencionados, se realizará el DESMONTE PREVENTIVO Y PROVISIONAL, en aplicación del numeral 5 del Procedimiento Desmonte de Medidas de Protección del Proceso de Gestión de Medidas de Protección de la Unidad Nacional de Protección identificado con el código- GMP- PR-06/03.

Que el grupo de Control, Seguimiento y Desmontes adelantará las diligencias administrativas tal como prevé el manual de procesos y procedimientos, para efectos que de manera preliminar realice el desmonte preventivo y provisional de las medidas de protección, una vez se confirme o desvirtúe el hecho notorio objeto de la precitada diligencia; y con ello, determinar si permite colocarlo en la agenda ante la Coordinación de Grupo Secretaría Técnica del CERREM, con el fin de que la citada instancia lo presente ante el Comité y/o CERREM respectivo o en su efecto, remitirlo a quien corresponda internamente en la entidad.

Que por tanto, cuando los beneficiarios y/o beneficiarias del programa, tengan previsto salir del País, se requiere que se informe oportunamente por cualquier medio de comunicación a la Unidad Nacional de Protección, la fecha de salida y regreso al país; lo anterior, con el propósito de poder llevar a cabo el respectivo desmonte preventivo y provisional hasta tanto regrese el beneficiario y/o beneficiaria, caso en el cual la UNP deberá reintegrar las mismas medidas, siempre y cuando se tenga conocimiento de la fecha prevista de regreso por parte del beneficiario y/o beneficiaria.

Que en mérito de lo expuesto, este despacho.

RESUELVE:

Artículo 1°: Adoptar las decisiones emitidas por el Comité Especial de Servidores y Ex Servidores Públicos, para el caso del señor(a) **CLARA ISABEL VEGA RIVERA** identificado con cédula de ciudadanía No. **55169708** relacionado en el presente acto administrativo, que constan mediante acta de la sesión del Comité del **23/12/2019**.

Artículo 2°: Comunicar a la señora **CLARA ISABEL VEGA RIVERA**, identificada con número de cedula 55169708, atendiendo lo dispuesto en el numeral 8, artículo 2.4.1.2.40 del Decreto No. 1066 de 2015.

Artículo 3º: En caso de contar con medidas de protección diferentes a las adoptadas mediante el presente acto administrativo, proceder a su ajuste y/o finalización de acuerdo con las recomendaciones hechas por el Comité.

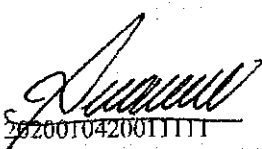
Artículo 4º: Los miembros del Comité Especial decidieron remitir el presente caso a la Secretaria General de la UNP, con el fin de tener en cuenta dentro del convenio la asignación y/o ratificación de las medidas.

Artículo 5º: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Artículo 6º: Frente a la presente resolución procede recurso de reposición, por tal razón se debe dar aplicación a lo señalado en la Ley 1437 de 2011, Capítulo VI, Artículo 76, Recursos contra los Actos Administrativos, Decreto 1066 de 2015, Artículos 2.4.1.2.40. Numeral 8, Artículo 2.4.1.2.45. y artículo 2.4.1.2.47. Numeral 4., el recurso de reposición podrá interponerse por escrito y dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del presente Acto Administrativo.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, 2020-01-04


2020010420011111
LUZ ANGÉLICA VIZCAINO SOLANO
Directora General (E)

	Nombre	firma	Fecha
Proyectó	Lady Viviana Ochoa Reyes		2019-12-29
Revisó	María Alejandra Lopez Velasquez		2019-12-31

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.

